

Doctor
CÉSAR AUGUSTO SAAVEDRA MADRID
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE CALI
Vía e-mail

Referencia: Medio de control de reparación directa promovido por
VALERIA ZUÑIGA y otros vs. DISTRITO ESPECIAL CALI.

Radicado: 2022-199

Asunto: Contestación a la demanda y al llamamiento en garantía

FRANCISCO J. HURTADO LANGER, abogado identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal y profesional adscrito a la sociedad de servicios jurídicos HURTADO GANDINI DAVALOS ABOGADOS S.A.S., apoderada especial de SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., sociedad legalmente constituida, con NIT 860.037.707-9, con domicilio principal en Bogotá D.C., representada legalmente por RICARDO SARMIENTO PIÑEROS, me permito contestar la demanda y llamamiento en garantía de la referencia, según se indica a continuación.

I. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR ESTE ESCRITO

El 30/07/2024 la apoderada del Distrito de Cali remitió a mi mandante correo electrónico de notificación personal del Auto Interlocutorio No. 761 del 24/07/2024, dictado dentro del proceso en referencia, por medio del cual se admitió el llamamiento en garantía. De conformidad con el inciso 4 del artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, esta notificación se entendió surtida una vez transcurridos dos (2) días hábiles desde el envío del mensaje de datos, es decir, el 01/08/2024.

En ese orden de ideas, el término de 15 días para contestar la demanda debía transcurrir de la siguiente manera:

02,05,06,08,09,12,13,14,15,16,20,21,22,23 y 26 de agosto del 2024, inclusive¹.

En consecuencia, este escrito es presentado en forma oportuna.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. FRENTE A LOS HECHOS

AL HECHO PRIMERO.- No me consta lo consignado en estos hechos debido a que corresponden a las supuestas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó el accidente vial; aspectos que no puede ser conocidas por mi representada por no haberlas presenciado. En ese sentido, me atengo a lo que se acredite documentalmente.

AL HECHO SEGUNDO.- En este numeral se consignan varios hechos, razón por la cual me manifiesto de la siguiente forma:

No me consta que la vía donde supuestamente se accidentó la señora Valeria Zúñiga se encontraba en mal estado por cuanto no existe ningún medio de convicción que acredite esta afirmación.

No me consta que con ocasión al supuesto mal estado de la carretera, la señora Valeria Zúñiga haya caído en un hueco mientras se movilizaba en una motocicleta. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el “Formulario Único de Reclamación de los Prestadores de Servicios de Salud por Servicios Prestados a Víctimas de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito aduce lo siguiente:

CONDUCTORA DE MOTO QUE SUFRE LESIONES AL PERDER EL CONTROL DEL VEHICULO Y CAER

(énfasis propio)

En ese orden de ideas, ¿la caída de la señora Valeria Zúñiga realmente aconteció por la presencia de un hueco en la vía u obedece a una pérdida de control por un posible exceso de velocidad o la presencia de un tercero?

AL HECHO TERCERO.- No me consta lo afirmado en este hecho por cuanto se relacionan a las secuelas físicas derivadas del accidente de tránsito; aspecto que se escapa a la esfera

¹ Los días 3, 4, 7, 10, 11, 17, 18, 19, 24 y 25 de agosto del 2024 no corrieron términos por ser días inhábiles.

de conocimiento de SBS Seguros por ser ajenas a su actividad mercantil. En ese sentido, me atengo a lo que se acredite con las pruebas documentales.

AL HECHO CUARTO.- No me consta lo consignado en este hecho, puesto que corresponde a condiciones que rodean la salud del demandante, las cuales no podría conocer mi representada en su calidad de compañía aseguradora. Así pues, me atengo a lo que acrediten las pruebas documentales.

AL HECHO SEXTO (SE PRECISA QUE NO EXISTE EL HECHO QUINTO) .- No me consta lo expuesto en este hecho debido a que corresponden a las supuestas secuelas en la vida cotidiana de la víctima directa; las cuales no pueden ser del conocimiento de mi representada por no haber tenido alguna injerencia en ellas. Por ende, me atengo a lo que se acredite en las siguientes etapas procesales.

AL HECHO SÉPTIMO Y OCTAVO.- No me consta lo afirmado en estos hechos por cuanto se relacionan con aspectos íntimos y personales de la señora Valeria Zúñiga que no pueden ser del conocimiento de mi representada. Por ello, me atengo a lo que se acredite en las etapas procesales correspondientes.

AL HECHO NOVENO Y DÉCIMO.- Lo transcrito en estos numerales no son hechos, sino consideraciones jurídicas y/o alegatos de conclusión que devienen en inoportunos para este momento procesal. Por ende, haré la respectiva interpelación en las excepciones de mérito.

AL HECHO DÉCIMO PRIMERO.- No me consta lo expuesto en este hecho por cuanto se relacionan a trámites extrajudiciales sobre los cuales no hizo parte mi representada. Por ende, me atengo a lo que se acredite con las pruebas documentales.

2. FRENTE A LAS PRETENSIONES

Me opongo a cada una de las declaraciones y pretensiones de la demanda, pues carecen de fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que hagan viable su prosperidad.

Lo anterior, debido a que la parte demandante no logra, siquiera de forma sumaria, demostrar los elementos que configurarían la eventual responsabilidad en cabeza de la parte demandada, ni da razón que justifique la desproporción de sus pretensiones. Evidenciando que no se constituyen las premisas fácticas y jurídicas que configuran los elementos de la responsabilidad que se pretende, y en lo que a ella respecta no hay prueba alguna que pueda soportar las pretensiones de la demanda, me opongo a todas ellas por considerarlas improcedentes.

En ese orden de ideas, se formulan las siguientes:

3. EXCEPCIONES DE MÉRITO

3.1. Inexistencia de imputación fáctica por ausencia de claridad sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar | Hecho exclusivo de la víctima

En el presente caso no está demostrada la relación de causalidad entre la conducta del Distrito y el daño alegado por la parte actora. Dentro de los requisitos que de tiempo atrás la ley, la doctrina y la jurisprudencia han determinado para que surja la responsabilidad del Estado está el denominado nexo causal o la imputación fáctica. Esto no es otra cosa que la relación o vínculo que debe existir entre el hecho u omisión y el daño. En este orden de ideas, si no hay nexo causal, no surge responsabilidad alguna y, por ello, en el caso que nos ocupa no puede condenarse a la parte demandada, cuando su conducta nada tuvo que ver con el resultado dañoso o, al menos, **no hay prueba de ello**.

Para probar la existencia del nexo causal es necesario que la causa real, fáctica, sea aquella determinante en el acaecimiento del hecho, lo cual no se refleja en los hechos de la demanda. La jurisprudencia nacional ha avalado esta posición dentro de sus pronunciamientos:

(...) la jurisprudencia nacional ha utilizado como método para identificar la 'causa' del daño, la teoría de la causalidad adecuada, según la cual, sólo es causa del resultado, aquella que es suficiente, idónea y adecuada para la producción del mismo (...). Así lo señaló el Consejo de Estado en sentencia de 22 de junio de 2001, con ponencia del Consejero Doctor, Ricardo Hoyos Duque: '(...) es claro que sólo alguna o algunas de las causas que intervienen en la realización del daño son jurídicamente relevantes. Para establecer cuál es la determinante en la producción del daño se han ideado varias teorías y aunque su validez no es absoluta pues con ninguna de éstas puede obtenerse la solución de todos los casos concretos, sí constituyen ayudas metodológicas importantes. La teoría de la causalidad adecuada es la de mayor acogida en la jurisprudencia, (...). Según esta teoría, sólo los acontecimientos que normalmente producen un hecho pueden ser considerados como la causa del mismo. Por lo tanto, un comportamiento es el resultado de un daño, si al suprimirlo es imposible explicar el resultado jurídicamente relevante (...)'² (destacado fuera del texto original).

² CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Magistrado ponente: Ariel Salazar Ramírez. SC13925-2016. Radicación 05001-31-03-003-2005-00174-01. Bogotá D.C., treinta de septiembre de dos mil dieciséis.

Por esta misma senda se pronunció el Consejo de Estado:

La equivalencia de condiciones fue sustituida –en la jurisprudencia de esta Corporación– por la teoría de la causa adecuada, de acuerdo con la cual *“de todos los hechos que anteceden la producción de un daño solo tiene relevancia aquel que, según el curso normal de los acontecimientos, ha sido su causa directa e inmediata”*. Esta teoría fue acuñada e implementada, por el rechazo a la equivalencia de condiciones, *“[...] pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito”*. Así pues, en aras de una racionalización, el juicio de responsabilidad se enfocó en lo que cabría esperar normalmente, bajo la premisa de que un sujeto sólo está obligado a resarcir un perjuicio, cuando este sea razonablemente esperado y previsible para un observador objetivo³.

Para encontrar tal causalidad se debe, en primera medida, identificarse con suficiencia las circunstancias que rodearon el suceso lo cual realmente no ha acreditado la contraparte. **Probar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió un suceso del cual se reclama una responsabilidad es sumamente fundamental.** Así lo ha mencionado jurisprudencia del Consejo de Estado en la cual fue imposible probar que una persona que conducía una moto cayó en una alcantarilla sin tapa, a falta de prueba frente a las condiciones de tiempo, modo y lugar en los que ocurrió el accidente, así expresa esta:

Ahora bien, con las pruebas relacionadas no hay certeza para la Sala que el accidente sufrido por el señor (...) ocurrió porque este cayó en la moto que se transportaba en una alcantarilla que se encontraba sin tapa, como lo aduce la demanda, **pues era necesario haber establecido plenamente el sitio o dirección exacta del accidente y demás datos pertinentes, como eran las circunstancias de tiempo, modo, y lugar en que se presentaron los hechos y poder el Tribunal hacer la valoración respectiva para efecto de concluir si le cabía responsabilidad a la entidad pública, pues determinado el sitio preciso del accidente y si existía la mentada alcantarilla sin tapa, era del caso establecer a que entidad pública le correspondía la conservación y mantenimiento de la vía, de eso haber sido así”**⁴ (resaltado fuera de texto).

En el presente caso, no se evidencia ningún detalle concreto sobre la existencia de un hueco y ni siquiera una prueba contundente que acredite que, de existir dicho foramen, el incidente se presentó con ocasión a su existencia. El demandante apenas proporciona la dirección del lugar del accidente, pero no es posible determinar, a partir de su descripción,

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de noviembre de 2019. Exp. 05001-23-31-000-2002-02333-01

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera. 29 de enero de 2014 MP Carlos Alberto Zambrano

en qué parte de la calzada se encuentra el supuesto bache. Tampoco se menciona el tamaño, las medidas, la profundidad del hueco. Además, no hay constancia de que alguna autoridad de tránsito haya registrado la existencia del incidente vial. La falta de estas evidencias hace que no se pueda sustentar la alegación del demandante sobre la existencia y las características del hueco en cuestión.

Aun cuando todavía es incierta la existencia de un hueco en el lugar del accidente, reciente jurisprudencia relacionada a **la existencia de obstáculos en la vía ha indicado que la existencia de un hueco no es un hecho suficiente por sí solo, para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado** en caso de producirse un daño por ello, ya que este debe ir acompañado de la acreditación del obstáculo como causa eficiente del daño, así se expresa que:

A pesar de que obra prueba en el expediente que demuestra que, en efecto, sobre la vía en la cual se produjo el hecho existencia huecos, no se probó que estos hubieran incidido en la causación del daño padecido por los demandantes, dado que no está demostrado que la colisión se hubiera producido, efectivamente, al caer el vehículo en uno de estos. Se insiste, las fotografías que obran en el expediente dan cuenta de esas fallas sobre la vía, pero no demuestran las circunstancias en las cuales se produjo el accidente, ni siquiera se tiene prueba de la dimensión de tales huecos, de tal manera que tampoco puede inferirse la existencia de ese nexo causal.⁵

De esta manera, bajo ningún razonamiento indiciario ni descripción detallada de los hechos, se puede explicar cómo la causa eficiente del accidente se debe a la presencia de un hueco en la vía. No se ha demostrado cómo las dimensiones del hundimiento provocarían caídas en cualquier circunstancia si alguien transitara por esta vía. Tampoco se ha explicado en qué medida el hueco impediría el tránsito normal de los motociclistas, ni se ha probado que la ocurrencia del accidente fuera inevitable aun cuando el demandante estuviera cumpliendo con las normas de tránsito y los límites de velocidad establecidos.

Además, no se aportó ningún medio probatorio oficial que permita identificar las condiciones iniciales en las que ocurrió el accidente, tales como el Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT) o croquis. Estos documentos, emitidos por la autoridad de tránsito, describen los pormenores de los accidentes viales y la hipótesis de la causa eficiente del mismo, siendo la recolección primaria de datos más cercana a los hechos, orientada a la identificación clara y probable de la causa. La ausencia de tales pruebas deja inciertas las condiciones iniciales que rodearon el accidente.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. 19 de marzo de 2021 MP Maria Adriana Marín.

No hay evidencia, más allá del testimonio de la señora Zúñiga, de que el accidente ocurriera tal como lo describe en la demanda, lo que impide observar el comportamiento de quien realizaba la acción y establecer si la víctima directa realmente conducía el vehículo, si este correspondía al descrito en la demanda y si estaba en perfecto estado para ser conducido. Además, otros múltiples escenarios son posibles, como una colisión con otro vehículo que se haya dado a la fuga, algo que ocurre frecuentemente en accidentes, o maniobras del conductor al transitar a alta velocidad; máxime cuando las pruebas del expediente dejan en zozobra este punto:

CONDUCTORA DE MOTO QUE SUFRE LESIONES AL PERDER EL CONTROL DEL VEHICULO Y CAER

ACCIDENTE DE 23 AÑOS SIN ANTECEDENTE DE IMPORTANCIA QUIEN PRESENTO ACCIDENTE DE TRANSITO CON TRAUMA EN BOCA Y EXTREMIDADES,
(énfasis propio)

Sin perjuicio de que las circunstancias de tiempo, modo y lugar no son claras ni fueron acreditadas por la parte demandante, y tampoco ha sido probada la existencia de un hueco y sus características relevantes para la ocurrencia del accidente, de las escasas pruebas aportadas es posible inferir que las actuaciones del demandante fueron determinantes sobre la generación del daño.

Así, es relevante recordar el deber de cuidado que recae sobre los motociclistas, como lo estipula el artículo 95 del Código de Tránsito, en el que se establece la obligación de respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad. Asimismo, el artículo 108 del mismo código, en su último inciso, enfatiza que **"el conductor deberá tener en cuenta las condiciones del suelo, la humedad, la visibilidad, el peso del vehículo y otras condiciones que puedan afectar la capacidad de frenado, manteniendo una distancia prudente con el vehículo que lo precede."** Esto implica que, sobre el demandante recaía la obligación de estar alerta a las condiciones del entorno vial y respetar el deber de autocuidado. Dado que la conducción de vehículos, y especialmente de motocicletas, es una actividad inherentemente riesgosa, es fundamental que los conductores adapten su comportamiento a las circunstancias específicas de la vía para prevenir accidentes.

En este caso, aunque pueda existir un obstáculo en la vía, el motociclista tenía la responsabilidad de conducir de manera que tomara en cuenta dichas condiciones, ajustando su velocidad y manteniendo una distancia segura. Esto le hubiera permitido evitar y superar con cuidado cualquier percance que pudiera presentarse.

Además, considerando que el accidente ocurrió en una vía amplia y despejada, es razonable esperar que un conductor atento podría haber superado un obstáculo con la debida precaución o al menos prever su acercamiento; máxime cuando, supuestamente, el incidente se presentó en horas de la mañana. No obstante, el hecho de que haya incurrido

el insuceso con las características establecidas, permite inferir que la señora Valeria Zúñiga transitaba con un muy posible exceso de velocidad.

En conclusión, la falta de pruebas sobre la existencia y características del hueco impiden establecer un nexo causal entre el daño y algún comportamiento imputable a la entidad demandada. Mientras que, la falta de responsabilidad de la demandante de conducir con el debido cuidado y atención a las condiciones de la vía sugiere que el comportamiento de la víctima tuvo una incidencia significativa en la ocurrencia del accidente, configurando el nexo causal a partir del hecho exclusivo de la víctima.

3.2. Insuficiente acreditación de la imputación jurídica

Aun cuando no hay certeza de la existencia de un hueco, y de que el mismo pudiera causar tal accidente, vale analizar si el Distrito incurre en algún incumplimiento obligacional a su cargo. En ese sentido, vale mencionar la jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la falla del servicio en casos de huecos en la vía, en la cual se entiende únicamente en dos supuestos en que la misma puede predicarse, a saber:

“De la misma manera, la Sala ha determinado la responsabilidad por omisión del deber de mantenimiento de carreteras en dos eventos: i) cuando se ha dado aviso a la entidad sobre un daño en la vía, que impide su uso normal y no es atendida la solicitud de arreglarlo, ni se ha encargado de instalar las correspondientes señales preventivas y ii) cuando unos escombros u obstáculos permaneces abandonados en una carretera durante un periodo razonable, sin que hubieren sido objeto de remoción o demolición para el restablecimiento de la circulación normal de la vía.”⁶

En este sentido, el Consejo de Estado ha determinado cuáles son los escenarios en los que se puede predicar una falla del servicio a cargo de una entidad encargada del mantenimiento vial. Estos escenarios guían a los demandantes respecto a los presupuestos que deben probarse si se quiere la declaración de responsabilidad de una entidad bajo una falla del servicio.

En este caso, el demandante no cumplió con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, pues no demostró que previamente se le haya dado aviso al Distrito de la existencia del hueco en la malla vial que aparentemente ocasionó el accidente de la señora Valeria Zúñiga (como exige la primera de las premisas reconocidas por el Consejo de Estado); igualmente, no demostró que dicho hueco estuviese en ese sitio durante un periodo razonable, pues no indica ni siquiera el tiempo en el que se encontraba

⁶ Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Tercera Sentencia de 9 de junio de 2010 M.P. Gladys Agudelo Ordoñez.

el mismo en la vía (como exige la segunda premisa).

3.3. Excesiva valoración de los perjuicios inmateriales

En el presente caso, el demandante solicita que se paguen \$5.000.000 por concepto de perjuicio moral. No obstante, no debe perderse de vista que en el evento en que se logre endilgar una responsabilidad y/o un daño resarcible a cargo del Distrito, dicho daño solo debe repararse en su justa medida y de conformidad con las pautas jurisprudenciales aplicables en nuestro país, sin perder de vista el carácter subjetivo que necesariamente implica la tasación de los perjuicios inmateriales. Para esto, el operador judicial debe acudir a criterios jurisprudenciales que le permitan tasarlos en justa medida.

Aunque no hay lugar al reconocimiento del perjuicio moral, pues el daño que se alega no le es atribuible al Distrito, en el eventual pero poco probable caso en el que en el presente proceso sea proferida una sentencia condenatoria, su despacho no debe acceder a las pretensiones de los demandantes, ya que estas debieron haber estado acordes con la naturaleza de los intereses quebrantados, lo que en este caso no sucede. Sin pretender con esto avaluar un daño que por su naturaleza es inestimable.

No en pocas sentencias, el Consejo de Estado se ha referido sobre la forma de tasar el monto del daño moral, y sobre lo que implica la reparación de este perjuicio, sobre lo cual estima lo siguiente:

“(L)as características mismas que ofrece el hecho generador de responsabilidad, partiendo de la premisa de que reparar valores morales por la vía del “arbitrium iudicis” no busca crear ganancias para, nadie, sino corregir con -sentido de justicia, satisfacer o desagrarar sentimientos heridos sin derecho.” (destacado fuera del texto original).

Así pues, la indemnización por perjuicio moral solo debe ser motivo de reparación y no de enriquecimiento, por lo que solo debe otorgarse en la medida que repare el daño. En esa medida deberá de indemnizarse los perjuicios que se acrediten. Así, el juez evaluará la gravedad de las lesiones y, basándose en un porcentaje de afectación, determinará la valoración de los perjuicios.

En este caso, la demandante sufrió lesiones superficiales en su rodilla y mentón que no generaron algún tipo de fractura y se solucionaron con una intervención estética. Así, el pronóstico de recuperación fue positivo con el adecuado tratamiento de rehabilitación. Es relevante tener en cuenta que después de su egreso de la clínica, no hay evidencia en las historias clínicas la presencia de secuela, o disminución de sus capacidades motrices. Considerando estos aspectos, la sana lógica permite afirmar que la magnitud del daño no debería superar el 2%.

3.4. Ausencia de acreditación del lucro cesante

La demandante solicita el reconocimiento de perjuicio material en la modalidad del lucro cesante por un valor de quinientos setenta y un mil quinientos veintisiete pesos (\$571.527 COP). Sin embargo, este perjuicio no debe ser reconocido por ausencia probatoria respecto al ejercicio de una actividad económica al momento del accidente, y a la disminución de la capacidad laboral. El Consejo de Estado ha interpretado el lucro cesante como la pérdida de ganancias o beneficios económicos que no se materializan debido al daño sufrido, y que, de no haber ocurrido el daño, habrían ingresado al patrimonio de la víctima. Sin embargo, señala que, al igual que cualquier otro tipo de perjuicio, para que proceda su compensación, debe ser comprobado. Así, la sección tercera de esta autoridad expresa:

“la ganancia frustrada o el provecho económico que deja de reportarse y que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima. (sic) Pero que (sic) como todo perjuicio, para que proceda su indemnización, debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a reparación alguna”⁷ (Destacado fuera del texto original)

En esta misma línea, el Consejo de Estado⁸ ha abordado el tema del reconocimiento del lucro cesante para trabajadores informales, estableciendo que este reconocimiento se limita a los casos en los que la víctima se encontraba realizando una actividad productiva en el momento en que se produjo el daño. Asimismo, en la misma línea jurisprudencial, se establece que el juez solo puede dictar una condena si, basándose en las pruebas presentadas en el expediente, se demuestra que la posibilidad de obtener un ingreso era cierta. En otras palabras, la compensación corresponde a la continuación de una situación previa o a la realización efectiva de una actividad productiva lícita que ya estaba establecida.

Sin embargo, en el caso de la señora Zúñiga, no se aportó ninguna prueba como una certificación laboral, libros contables, transacciones o movimientos bancarios que sustentara su actividad laboral o el ejercicio de una actividad lícita que le generara ingresos.

3.5. Ausencia de acreditación del daño emergente

En el artículo 1614 del Código Civil está comprendida la definición del daño emergente, la cual se suscita cuando se presenta una disminución patrimonial de la víctima, que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse

⁷ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de julio de 2011, exp. 18.008.

⁸ Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera, sentencia del 18 de julio de 2019, exp. 44.572.

retardado su cumplimiento. En todo caso, para que puedan ser objeto de reparación económica, se requiere que sean ciertos y plenamente demostrados. Al tiempo que, el valor de la indemnización no puede extenderse más allá del detrimento patrimonial padecido por la víctima. Esto implica que al demandante le recae la obligación de probar la erogación mediante documento válido.

En este caso, el demandante solicita la suma de doscientos treinta y dos mil pesos (\$232.000) por concepto de una **cotización** de ciertos servicios y productos. Sin embargo, en el expediente no existe ni siquiera prueba sumaria de que se haya efectuado el pago de tales erogaciones, como podrían ser transacciones bancarias, facturas, recibos de pago, u otros medios de verificación; inclusive, la prueba documental que intenta acreditar este perjuicio es precisamente una cotización. Adicionalmente, se desconoce si la cotización versa sobre la motocicleta de la víctima directa, quién la expide y si realmente obedece a los presuntos daños que pudo tener el vehículo.

En ese sentido, no es posible tener certeza sobre la cuantía de dicho daño emergente, pues el demandante no ha cumplido con la carga probatoria que le corresponde. La sola afirmación del perjuicio, sin el soporte documental válido, es insuficiente. En conclusión, al no existir prueba documental válida que acredite el pago de los gastos de transporte, no es posible determinar el monto del daño emergente reclamado por el demandante, por lo que dicha pretensión indemnizatoria no puede prosperar.

3.6. Excepción genérica

Me refiero con ello a cualquier hecho o derecho a favor de mi mandante, que resultare probado dentro del proceso, toda vez que el juez oficiosamente debe declarar probadas las excepciones que resulten de los hechos acreditados en el expediente de conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso. Por lo anterior, le solicito a su despacho declarar probada cualquier otra excepción que resulte acreditada a lo largo del proceso frente a la demanda.

III. CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

1. FRENTE A LOS HECHOS

AL HECHO PRIMERO.- Es cierto que en su Despacho se adelanta proceso de reparación directa contra el Distrito Especial de Santiago de Cali, radicado bajo el No. 2022-199 adelantado por la señora Valeria Zúñiga.

AL HECHO SEGUNDO.- Es cierto que en el proceso referido la demandante busca radicar en cabeza del Distrito Especial de Santiago de Cali, el acaecimiento de los perjuicios ocasionados en supuesto accidente de tránsito ocurrido según el escrito de la demanda el 01/08/2022.

AL HECHO TERCERO.- En este numeral se consignan diversas afirmaciones, frente a las cuales me pronuncio de la siguiente forma:

Es cierto que el Distrito de Cali tomó la Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 1507222001226 con SBS Seguros Colombia S.A. y otras coaseguradoras.

Es cierto que la Póliza cuenta con una vigencia temporal comprendida desde el 30/04/2022 al 01/12/2022, bajo la modalidad de ocurrencia.

SBS Seguros solo se verá comprometida en caso de que el Distrito de Cali sea condenado, y siempre que se cumplan las condiciones generales y particulares de la Póliza. Además, su responsabilidad solo corresponderá al reembolso de lo que efectivamente pague el asegurado, puesto que su vinculación al presente proceso fue mediante el llamamiento en garantía y no de forma directa por los demandantes.

2. FRENTE A LAS PRETENSIONES

La responsabilidad de SBS Seguros Colombia S.A. únicamente podrá verse comprometida, y en este sentido podrán prosperar las pretensiones del llamamiento en garantía, siempre que se profiera una condena en contra de la entidad asegurada y se cumplan las demás condiciones generales y particulares del contrato de seguro.

Igualmente, en el evento de condena, la responsabilidad de mi mandante se limitará a reembolsar el dinero que el Distrito deba pagar y no podrá ser condenada solidariamente a pagar a los demandantes pues éstos no ejercieron la acción directa que pudieron tener en contra de mi mandante.

No debe perderse de vista que la responsabilidad de SBS Seguros únicamente podrá verse comprometida siempre que se profiera una condena en contra de la compañía asegurada y se cumplan las demás condiciones generales y particulares del contrato de seguro. En ese orden de ideas, se formulan las siguientes:

3. EXCEPCIONES DE MÉRITO

3.1. Límite de la suma asegurada y condiciones del contrato de seguro

SBS Seguros Colombia S.A. solo estará llamada a responder en el escenario en que el asegurado sea declarado civilmente responsable del hecho dañino, y siempre y cuando se cumplan las condiciones particulares y generales de la Póliza No. 1507222001226.

De no prosperar o solo hacerlo parcialmente las excepciones propuestas anteriormente o las que configuren hechos que eximan de responsabilidad a la asegurada y que sean debidamente acreditados durante el proceso, solicito que en la eventual condena en contra de mi representada se tenga como límite de la misma la suma asegurada en las condiciones de la póliza, esto es, teniendo en cuenta los límites, amparos, sumas aseguradas, deducibles, exclusiones, etc., de tal manera que se respeten los términos del contrato de seguro.

En el evento de que los hechos que dieron origen a este proceso impliquen una de las exclusiones pactadas en el contrato de seguro, la compañía aseguradora estará relevada de asumir obligación alguna. Las sumas aseguradas para el presente caso son las siguientes:

COBERTURAS		VALOR ASEGURADO	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 7.000.000.000,00	\$	7.000.000.000,00

(Pág. 1 de la póliza)

Lo anterior, por supuesto, no constituye, bajo ninguna circunstancia, aceptación de responsabilidad alguna. Reitero que mi representada se opone a la prosperidad de las pretensiones formuladas en la medida que desconozcan las condiciones particulares y generales del contrato de seguro.

3.2. Disponibilidad del valor asegurado

La suma o valor asegurado es la cantidad fijada en cada una de las garantías de la póliza que constituye el límite máximo de la indemnización a pagar, en atención a los diferentes conceptos, por parte del asegurador en caso de siniestro. Es decir, la póliza tendrá cobertura de uno o diversos siniestros que puedan presentarse durante la vigencia de la póliza, sin que en ningún caso se pueda superar la indemnización total la suma o valor asegurado.

En tal virtud, en caso de proferirse una condena que implique una obligación a cargo de la aseguradora deberá tenerse en cuenta el monto disponible en ese momento exacto (de condena) y que, por supuesto, dependerá de la suma total de los pagos efectuados por SBS Seguros Colombia S.A que puedan haberse realizado con ocasión de otros siniestros presentados durante la misma vigencia. Pagos que podrán haberse presentado (o presentarse) derivados del mismo siniestro o de siniestros que nada tienen que ver con el que nos ocupa en este proceso, pero que en todo caso implican la afectación de la misma póliza. En consecuencia, deberán tenerse en cuenta tales pagos al momento de dictarse sentencia, providencia que necesariamente deberá hacer referencia al valor asegurado disponible para el momento en que se profiera el fallo en caso de que el mismo sea condenatorio. De tal suerte que si por los pagos que se hayan realizado con ocasión de otros siniestros el valor asegurado se ha agotado, así deberá declararse en la sentencia y en tal caso la compañía que represento estará relevada de asumir pago alguno en este proceso.

3.3. Límite de responsabilidad de SBS Seguros Colombia S.A por coaseguro pactado en la póliza

En el caso que nos ocupa, existe un coaseguro pactado que implica que la responsabilidad en que incurra el Distrito está cubierta simultáneamente por SBS Seguros Colombia S.A en un veinte por ciento (20%), y el ochenta por ciento por las coaseguradoras restantes (80%), veamos:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURADORA	TIPO DE COASEGURO	%PARTICIPACION
AIG COLOMBIA SEGUROS GENERALES	CEDIDO	20,00%
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	CEDIDO	22,00%
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	CEDIDO	28,00%
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO	CEDIDO	30,00%

El artículo 1095 del Código de Comercio que se encuentra a continuación de las normas que regulan la coexistencia de seguros se refiere a este tipo de eventos y estipula que *“las normas que anteceden se aplicarán igualmente al coaseguro, en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro”*.

Así las cosas, el límite de responsabilidad de SBS Seguros Colombia S.A. es proporcional al riesgo asumido, esto es, hasta el veinte por ciento (20%) del valor del siniestro. Lo anterior sin perjuicio de condiciones adicionales como pudiere ser la aplicación de deducible.

3.4. Excepción genérica

Me refiero con ello a cualquier hecho o derecho a favor de mi mandante, que resultare probado dentro del proceso, toda vez que el juez oficiosamente debe declarar probadas las excepciones que resulten de los hechos acreditados en el expediente, de conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso.

4. PRUEBAS

4.1. Documentales

4.1.1. Certificado – Póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual No. 1000253 de SBS Seguros.

5. ANEXOS

5.1. Poder para actuar.

5.2. Certificado de existencia y representación legal de SBS Seguros Colombia S.A.

5.3. Certificado de existencia y representación legal de Hurtado Gandini Dávalos Abogados S.A.S.

6. NOTIFICACIONES

6.1. Mi poderdante, la compañía SBS Seguros Colombia S.A., las recibirá en la Avenida 9N # 101-67, Piso 7 de Bogotá D.C., y en el correo electrónico: notificaciones.sbseguros@sbseguros.co.

6.2. Los demandantes, los demandados y el llamante en garantía en las direcciones por ellos aportadas.

6.3. El suscrito las recibirá en la Calle 22 Norte # 6AN-24, Oficinas 901 y 902, Ed. Santa Mónica Central, del Distrito Especial de Santiago de Cali y en los correos electrónicos: notificaciones@hgdsas.com ; oarango@hgdsas.com ; cdperez@hgdsas.com y jdrobles@hgdsas.com .

Atentamente,

Oficinas 901A – 901B | Edif. Santa Mónica Central | PBX +57 (602) 6410900 |
Cali - Colombia
www.hgdsas.com

FRANCISCO J. HURTADO LANGER
T.P. 86.320 del C.S. de la J.
Representante legal y abogado designado de
HURTADO GANDINI DAVALOS ABOGADOS S.A.S.
NIT 805.018.502-5